

INTRODUCCIÓN

La preocupación por conocer la cambiante realidad política del país ha llevado a varias instituciones y académicos a emprender investigaciones sobre la cultura política, y en particular, a indagar sobre la relación de la cultura política de los mexicanos y las orientaciones hacia la democracia. Estas investigaciones, que se iniciaron en la década de los cincuenta, permiten conocer las orientaciones de la población hacia la política en diferentes épocas, y, particularmente, durante el periodo llamado de transición a la democracia,² de tal manera que hoy se cuenta con un importante acervo de investigación cualitativa y cuantitativa. Sin embargo, no siempre es posible construir con ellas series en el tiempo que permitan comparar la información.

No obstante lo valioso de dichas investigaciones, sistemáticamente se ha dejado de lado el análisis del desempeño institucional, se ha minimizado el papel que las instituciones cumplen en la formación y modelación de una cultura, en un momento en el que se plantea como problema principal, ya no la transición, sino la cabal instauración de una democracia de calidad y su consolidación, procesos en los que las instituciones constituyen un factor clave.

Si comparamos con cincuenta años atrás las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nivel de compromiso cívico de los ciudadanos hoy? ¿Qué tipo de actitudes, valores y orientaciones hacia la democracia predominan en un contexto de cambio político?, y ¿qué modalidades asume la relación entre las instituciones y los ciudadanos en este contexto? ¿De qué manera la relación entre los ciudadanos y las instituciones contribuyen al desarrollo de la democracia, o lo obstaculizan?

La investigación se orienta a conocer el grado de compromiso cívico, los valores, actitudes, disposición a la organización, y desempeño institu-

² Véanse, entre otros, los siguientes trabajos: *Los mexicanos de los noventa: una encuesta nacional de actitudes y valores*, IISUNAM-IFE, 1994; *La reforma política y su contexto socio-cultural*, IISUNAM-IFE, 1996; *Cultura política en México* Winocur, R. IFE (1999); *Ciudadanos y cultura de la democracia en México: normas, valores y orientaciones de la democracia*, IISUNAM-IFE, 2000; *Legitimidad y gobernabilidad en México. Una encuesta nacional sobre procesos políticos*, IISUNAM, 2001; *Encuesta Nacional de Cultura Política*, 2001, Segob; *Encuesta Nacional de Juventud*, 2000 y 2005, IMJ; *Encuesta Nacional de Transparencia y Buen Gobierno*, 2000, Transparencia Mexicana.

cional que lo sustentan, y que conducen a la consolidación u obstaculizan el desarrollo de la democracia, respetando la investigación original y construyendo, al mismo tiempo, un modelo estadísticamente comparable con la investigación *The Civic Culture*, levantada en 1959, para crear una serie en el tiempo que permita dar continuidad al análisis y efectuar comparaciones.

El estudio tendría que arrojar luces, en fin, acerca de las orientaciones y valores, disposición a la organización, estructuras institucionales y desempeño institucional, que alientan la participación ciudadana, sin perder las especificidades que aporta la pertenencia a distintos contextos culturales y socioeconómicos, a diversas generaciones y regiones del país.

Entre los objetivos señalados para la realización de esta investigación se encuentran:

- Identificar persistencias y cambios registrados en la cultura política
- Elaborar un diagnóstico actualizado de las percepciones, actitudes y valores de la población frente a la política y la democracia

Las premisas básicas que debe cumplir una cultura para ser entendida como democrática, en el sabido de que la democracia “además de ser un conjunto de reglas del juego para la selección de los gobernantes y un determinado régimen político en cuyo centro se halla el conjunto de libertades civiles y políticas que articulan el Estado de derecho, también es una específica cultura, una forma de entender y practicar la convivencia social con arreglo a determinados valores y principios”.³

Entre esos valores y principios se encuentra el de la participación, entendido como el *deseo* activo de los ciudadanos de “ser antes que nada un sujeto activo de la política, un miembro de la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes; pero también quiere organizarse en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más amplio”.⁴ Se confirma esta imagen fuerte de la ciudadanía amplia entendida como derechos jurídicos e identidad cultural. Todo esto justifica las hipótesis planteadas, que de ser ciertas nos colocarían ante dos posibilidades:

- a) Los ciudadanos están de acuerdo con el modelo de ciudadanía amplia, pero se abren a dos opciones: o bien, las condiciones estruc-

³ IFE, *Educación cívica. Plan trianual (2001-2002)*.

⁴ Peschard, Jacqueline, *La cultura política democrática*, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, IFE, 1995.

turales del régimen político frustran su comportamiento ciudadano, o los ciudadanos carecen de los conocimientos, actitudes, recursos, convicciones, etcétera, apropiados para el ejercicio democrático de su ciudadanía. Obviamente, es esta última opción la que justifica la educación cívica.

- b) Los ciudadanos no están interesados en el modelo de la ciudadanía amplia, por lo que su desafección con la política no sería un problema propio de los ciudadanos, sino del programa democrático amplio. Incluso, podría plantearse, como hace buena parte del pensamiento liberal más restrictivo, que el fomento de una ciudadanía amplia, activa, pondría en peligro a la ciudadanía restringida de la participación electoral y las garantías jurídicas individuales.

Una proporción importante de la población recela o de plano rechaza la política como resultado de, al menos, los siguientes factores:

- No le ve ninguna utilidad práctica o simbólica.
- Percibe un uso persistentemente patrimonialista y abusivo de la política por parte de los políticos profesionales, que trasciende ideologías, programas y partidos.
- El discurso predominante en los medios tiende a deslegitimar no solo a políticos venales y corruptos, sino a la política como tal.
- No le ha conferido al ciudadano un nuevo significado ni le ha conferido utilidad y cercanía con la política.
- Esta hipótesis se puede complementar con un quinto factor, que englobaría a los cuatro anteriores en un escenario histórico:
- El largo periodo de transición política, con sus muchas reformas jurídicas y las numerosas negociaciones entre las elites partidarias, ha generado una experiencia centrípeta de la clase política como grupo ensimismado en reformar el régimen político sin lograr que las reformas se vinculen positivamente con las formas de vida cotidiana de la población.

Finalmente, más que un recelo o rechazo de la política, la población muestra indiferencia al percibir a la política como algo ajeno a sus vidas e impuesto desde fuera. Así, la utilidad de la política no pasa de los beneficios marginales que derrame ese mundo exterior con el que hay que negociar tácticamente; la política es patrimonio de los políticos, y cualquier extensión hacia la población no pasa de ser más que una intromisión de la que hay que defenderse.

La gente tiende a valorar al régimen democrático de acuerdo con la gestión del gobierno en turno, lo cual vuelve muy volátil su aprecio por dicho régimen. De este modo, el apoyo a la democracia, la lealtad hacia sus instituciones y principios, pasa a depender de la evaluación que la ciudadanía hace del comportamiento del gobierno en temas cruciales, que tienen que ver con un reclamo genérico de certidumbre: economía (empleo, salarios, inflación), seguridad pública, impartición de justicia, ecología, etcétera.

Esta hipótesis trataría de constatar que la población antepone la legitimación de corto plazo relacionada con la acción del gobierno frente a la legitimidad a mediano y largo plazo del régimen en su conjunto. Esto supone una confusión, que se explica por la falta de conocimiento suficiente sobre las diversas dimensiones del sistema político, o bien a las condiciones de inmediatez vital y carencia básica en que vive la mayoría de la población.

Otra variable a tener en cuenta en esta hipótesis es la experiencia por décadas de un régimen presidencialista sometido a la voluntad sexenal del presidente en turno y sin alternancia en el partido en el gobierno hasta el 2000. En esas condiciones, la confusión entre la legitimidad del gobierno y la del régimen es muy comprensible.

Por otra parte, en una ciudadanía restringida, el vínculo de la población con la política no va más allá de la elección del gobierno en turno, por lo que la legitimidad del régimen estaría restringida a la confianza que se da a ese gobierno. La ciudadanía no participa para construir una democracia extensa, sino para elegir un gobierno eficaz.

En capas significativas de la población prevalece no solo el desencanto respecto de la política, sino una sensación de malestar producto de la creciente incertidumbre y violencia que se vive, y que puede constituir el caldo de cultivo para demandas de orden y seguridad encarnadas en opciones no democráticas.

La evolución de una sensación generalizada es difícil de medir sin datos empíricos previos. Las percepciones retrospectivas pueden soslayar coyunturas inciertas ya superadas. Por ello es más interesante registrar la fuerza de la incertidumbre actual —incapacidad para gestionar la vida diaria en condiciones deseables— y relacionarla con el miedo o preocupación que se tenga por el futuro. La posibilidad de apoyar opciones nodemocráticas habría que relacionarla, además de con la fuerza de la incertidumbre, con la percepción que se tenga de que dichas opciones son viables, hasta qué punto su activación depende del individuo y qué capacidad tendría de evitarlas.

Contrariamente a lo que se afirma, la gente habla mucho de política en el ámbito privado, pero por un lado no identifica su propio discurso como

político y, por el otro, carece de las competencias, los espacios y/o los incentivos para llevar estas opiniones al espacio público.

La gente no identifica su propio discurso como político, porque para ella la política es una actividad lejana de sus ámbitos cotidianos. No se considera ni se pretende parte de la política más allá de los contactos electorales y administrativos ocasionales. No se trataría tanto de falta de competencias, espacios o incentivos, sino de competencias, espacios e incentivos contrarios a la política y lo público.

El nivel educativo está altamente correlacionado con un mayor conocimiento de la política y la democracia, así como con un mayor interés y/o aprecio genérico por ambas, pero no está correlacionada con el desarrollo de competencias cívicas propiamente dichas.

Se constata el hecho de que a un mayor nivel de educación los sujetos se identifican más con el discurso legítimo de la democracia, pero responden con menor intensidad a requerimientos cívicos, lo que haría a estos sujetos más inconsistentes en la relación democracia-civismo que los sujetos de menor nivel educativo.

Una posible explicación a este hecho podría deberse a los siguientes factores:

- En un país de grandes desigualdades, los individuos con mayor nivel educativo operan desde el lado positivo de esa desigualdad y tratan de legitimar su posición desde afinidades a un discurso democrático que pueden compartir solo en el discurso.
- El proceso educativo en una sociedad de desigualdades con fuertes diferencias entre enseñanza pública y privada fomenta comportamientos aristocratizantes y excluyentes.
- El sistema educativo del país está más dirigido a la reproducción de elites dominantes que a su transformación y la integración de los sectores populares.

El alto nivel de desconfianza a nivel privado y público, asociado a un creciente y acendrado individualismo como opción de desarrollo, explica, al menos en parte, la comparativamente baja propensión al trabajo voluntario y a la organización social. El alto nivel de confianza en el nivel de lo no gubernamental y la alta desconfianza en el sector público, asociados a un tradicional comunitarismo como opción de desarrollo, explican, al menos en parte, la comparativamente alta propensión al trabajo voluntario y a la organización social en determinadas comunidades o grupos.

De acuerdo con lo anteriormente dicho, los ciudadanos tratan de mantener sus acciones colectivas fuera del ámbito de la política, limitándose a participar en los procesos electorales. La participación social y comunitaria es más valorada que la participación política propiamente dicha.

La propensión a participar en la política y su valoración positiva dependen, en gran medida, del acervo que los individuos y los grupos tengan de pasadas experiencias de participación positiva: a mayor acervo participativo, mayor será la propensión a una participación activa permanente.

No obstante, la participación política está determinada, en buena medida, por situaciones coyunturales de necesidad y oportunidad, y las experiencias anteriores en tal rubro solo sirven como recursos tácticos para la nueva movilización, sin que ello repercuta en la formación de una ciudadanía participativa permanente.

Si en algo parece haber un acuerdo generalizado entre los especialistas de todas partes respecto a los límites y la crisis de las democracias existentes, es sobre la incapacidad del régimen para ejercer su principal función sistémica: la representación de los ciudadanos. El régimen representativo se ha ido haciendo más oligárquico y menos democrático, perdiendo capacidad de recibir las propuestas ciudadanas según su peso y transformarlas en políticas generales.

La representación política tiene tres niveles sistémicos: la autorización regular y temporal de gobernantes y representantes; la inclusión-exclusión simbólica de los miembros de la comunidad política mediante prácticas rituales y estructuras discursivas, y la intervención con mediaciones en el diseño y aplicación de políticas públicas generales, sectoriales y focales. ¿Cómo se presentan estos niveles en la realidad mexicana contemporánea?

- Los ciudadanos, de forma creciente, perciben que su voto y sus demandas a la hora de elegir a las autoridades políticas pierden poder debido al cierre de la clase política que recluta a sus miembros por fuera de los conductos constitucionales establecidos.
- Los ciudadanos se sienten poco incluidos en la representación simbólica nacional debido a que está detenida en formas y mensajes antiguos y poco flexibles, siendo poco innovadora en rituales y contenidos.
- La mayoría de la población siente que las políticas públicas están diseñadas y ejecutadas desde instancias ajenas a sus intereses y sobre las que no tiene capacidad real de influir. Esto podría deberse a que la población en general no conoce los medios existentes para

hacerse representar ante la administración pública y las autoridades políticas; a que no existen los canales adecuados para esa representación; las prácticas de representación ciudadana ante las autoridades están anquilosadas en formas predemocráticas y clientelares, que frenan la difusión de nuevas prácticas. A lo anterior puede aunarse que el interés de la población en general por intervenir en el diseño y ejecución de las políticas públicas es escaso y se limita a la petición de universalidad y eficacia.

Un último punto que ha sido contemplado de forma muy parcial en investigaciones anteriores es sobre el nivel de secularización de la cultura política mexicana, desde la premisa de que a una mayor secularización y laicismo de la cultura política mayor será la extensión y profundidad de los valores, principios y reglas democráticos. En la población en general existe una fuerte disonancia entre sus prácticas y valores religiosos y los requerimientos seculares y laicos de un régimen democrático.

Los apartados en que se divide esta investigación son los siguientes: el primer apartado se integra por las “Consideraciones teórico-metodológicas” para el análisis de la cultura política. Contiene la metodología de la investigación y el diseño muestral; el segundo, analiza el “Perfil de la población entrevistada”: perfil sociodemográfico, las características socioeconómicas y de la vivienda.

En el tercero, “La dimensión cognitiva de la política”, se abordan los problemas percibidos más importantes del país, el interés, información y consumo de medios, conocimiento político y seguimiento de asuntos públicos.

En el cuarto, “La dimensión afectiva de la política”, se estudian la confianza interpersonal y en las instituciones, el sentimiento de orgullo nacional y la Revolución mexicana de 1910-1917; el quinto apartado, “La dimensión evaluativa de la política: las competencias ciudadanas”, se dedica al análisis del impacto de la política en la vida cotidiana, las funciones de la política, la eficacia política ciudadana y los procesos de participación. En el sexto, se estudian los procesos de socialización política en diversos ámbitos, como el familiar, el escolar, el laboral, y frente a las instituciones políticas. Incluye los usos del tiempo libre y las cualidades más valoradas

En el séptimo apartado se abordan “La percepción de los partidos políticos, identidad y participación política” y la adhesión a la sociedad política organizada: interés en las campañas, valoración y participación en los partidos políticos.

Un apartado final incluye un resumen de los resultados de la investigación y consigna las conclusiones preliminares del estudio.

El documento se acompaña de tres anexos: diseño de muestra (1), el cuestionario utilizado en la investigación (anexo 2), las tablas que contienen los cruces básicos para cada pregunta de acuerdo con el sexo, la edad, la escolaridad, el ingreso, el partido con el que simpatiza, y la región (anexo 3).